



FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

MARZO 2022

El gobierno en etapa de “rodaje”

Estos primeros días de gobierno han sido minuciosamente analizados, y por momentos sobre interpretados, por los medios de comunicación, dirigentes políticos y analistas, destacando la “improvisación” de la visita de la ministra Siches a la Araucanía, la supuesta contradicción entre la titular de Interior y su subsecretario respecto a la existencia de presos políticos mapuches y la decisión de no presentar querellas por los hechos que impidieron su programado viaje a Temocuicui. La invitación al sacerdote Berrios a participar en el programa de erradicación de campamentos del gobierno y su posterior declinación, a partir de críticas por su relación con el sacerdote Renato Poblete, puso en incómoda posición al gobierno.

Nuevas manifestaciones en la plaza Italia, ya tradicionales los días viernes, reprimidas por los servicios policiales, han levantado críticas en las filas del oficialismo, insistiendo en la urgencia de una profunda reforma o refundación de las policías y la necesidad de investigar los hechos que han culminado con un manifestante herido a bala.

La propia decisión del gobierno de ponerle urgencia al proyecto que concede amnistía a los presos de la revuelta, sin tener los votos para su aprobación y sin la necesaria consulta con las bancadas oficialistas, generaron roces con senadores.

Y ya se han expresado contradicciones entre el gobierno y parlamentarios oficialistas por el tema de un nuevo retiro de los ahorros previsionales. Incluso se ha conformado una bancada de parlamentarios oficialistas por el quinto retiro.

Algunos de estos hechos constituyen “errores no forzados”, que bien se pueden adjudicar al necesario período de “rodaje” o ajuste del nuevo gobierno, que deberán

ser superados con una mejor coordinación entre el gobierno y sus bancadas, pero muestran que este gobierno no gozará del tradicional período de gracia que se concede a los gobiernos que asumen el poder. O será muy corto.

Y también revela todas las complejidades que presenta la fórmula de un gobierno y dos coaliciones, con trayectorias distintas que, si bien tienen un amplio campo de coincidencias en el terreno programático y político, subsisten también importantes diferencias, como ha quedado en evidencia con las críticas cruzadas que ha recibido públicamente el gobierno de sus propios partidarios en su proceso de instalación

Es más que evidente que la fórmula de dos coaliciones responde a la necesidad del gobierno de ampliar su base de apoyo. Fue imprescindible para ganar la segunda vuelta (Gabriel Boric llegó segundo en primera vuelta) y Apruebo Dignidad no cuenta con mayoría parlamentaria y requiere construirla.

Tampoco Apruebo Dignidad es una coalición muy sólida y homogénea. El Frente Amplio es un conjunto de partidos y movimientos que mantienen diferencias entre sí. Y es evidente que tiene diferencias con el partido comunista, en donde parecen cohabitar dos almas o sensibilidades. Una vinculada a la vieja guardia, en donde es posible identificar a Daniel Jadue, Carmona y Juan Andrés Lagos, partidarios del frente anti neoliberal (sin medias tintas) y otra más aperturista, en donde es posible ubicar a Camila Vallejos, Karol Kariola, Carmen Hertz, en tanto que Guillermo Teiller hace esfuerzos por compatibilizar ambas sensibilidades.

En la propia convención constituyente no opera Apruebo Dignidad Mientras el PC busca aliarse con sectores más radicales, como la ex lista del pueblo o representantes de los pueblos originarios, en posturas tan extremas como la nacionalización de la minería o el unicameralismo, sectores del Frente Amplio (no todos los convencionales frente amplistas responden a directivas partidarias) buscan acuerdos con el colectivo socialista y otros sectores de independiente, con posturas más moderadas y realistas.

De lejos, el presidente Gabriel Boric representa el liderazgo más proclive a la convergencia entre sus dos coaliciones, en tanto que otros sectores del Frente Amplio, partido comunista e incluso la Federación regionalista verde, aparecen como más renuentes a este encuentro. No existe ninguna posibilidad de que ese proceso de convergencia se produzca de forma fácil o rápida, y todo hace prever que se generarán nuevas tensiones que requerirán mejorar los mecanismos de coordinación y deliberación entre el gobierno y sus dos coaliciones para asegurar unidad de propósitos y acción mancomunada a nivel parlamentario.

Todo ello sin contar, que ambas coaliciones oficialistas sumadas, no reúnen mayoría parlamentaria y aún deben buscar acuerdos con otros sectores, como la Democracia Cristiana, el partido de la gente o independientes, para asegurar mayorías simples.

Sin lugar a dudas, el escenario de fragmentación política que presenta el nuevo parlamento, así como la fragilidad de las propias coaliciones y partidos, representa un gran desafío para el equipo político del gobierno y el propio presidente, que deberá

ejercer un sólido liderazgo para intentar ordenar a sus partidos, ampliar la base de sustentación de su gobierno y establecer las bases de un diálogo productivo con aquellos sectores de oposición que estén disponibles.

Es de esperar que el reciente conclave organizado por el gobierno con sus bancadas parlamentarias haya contribuido sino a resolver, al menos a poner mayor atención a la necesidad de actuar de manera unitaria, en base a una ética de la responsabilidad, asumiendo que el éxito o fracaso del gobierno, depende de su capacidad de sumar fuerzas tras objetivos comunes y que, tal como lo ha reiterado el primer mandatario, enfrenta un complejo escenario marcado por la crisis económica y social, agravado por los conflictos internacionales.

El proceso constituyente

En paralelo al proceso de instalación del nuevo gobierno, la convención constituyente inicia la etapa de definiciones acerca de los contenidos que serán parte de la propuesta de nueva constitución, que deberá ser sometido al plebiscito ratificatorio. Los plazos para estas definiciones se acortan y aún no se visualiza avances sustantivos en materias tan esenciales como el régimen político, evidenciando importantes diferencias entre los convencionales, que aún no logran superarse

Es evidente que al interior de la convención coexisten sectores más radicales, tanto en la derecha, que mayoritariamente se inclinaría por la opción de rechazo a una propuesta de constitución que no recoge sus puntos de vista, como de grupos anti sistémicos fundamentalistas o identitarios, que buscan plasmar sus propuestas en la nueva constitución.

Pero el problema mayor es que no existe unidad de propósitos en aquellos convencionales, militantes o independientes, que apoyan al gobierno, como ha quedado en evidencia con el rechazo de 93 de las 96 propuestas sobre régimen político presentadas al pleno por la comisión respectiva, así como en otras materias que han dividido fuertemente las opiniones entre los diversos colectivos.

La suerte del proceso constituyente está indisolublemente ligada a la suerte del gobierno. Es claro que la derecha, que viene trabajando activamente por la opción del rechazo al proceso constituyente, intentará convertir el plebiscito ratificatorio en un test de apoyo o rechazo del actual gobierno. El rechazo a la propuesta constitucional no tan sólo representaría un serio revés para el gobierno, sino que enfrentaría al país a una grave crisis institucional.

Diversos sectores, no tan solo la derecha, han venido expresando sus críticas y reservas acerca de la marcha del proceso constituyente. El llamado grupo de los “amarillos”, que reúne a un amplio sector de centro derecha y sectores de la centro izquierda, han reiterado su preocupación acerca de los acuerdos hasta ahora adoptados por la convención. Y más recientemente se sumó a las críticas el senador Francisco Huenchumilla, sosteniendo que se buscaba refundar el país. Sin lugar a

dudas es una mala señal, que podría inclinar a una mayoría de su partido a plegarse a la opción por el rechazo.

La derecha, como los poderes fácticos y no pocos medios de comunicación han desplegado una intensa campaña de descrédito hacia el proceso constituyente, barajando diversas fórmulas para dotar de mayores contenidos a la opción del rechazo, como la idea de generar una tercera alternativa (reflotar el proyecto de reforma constitucional del gobierno de Michelle Bachelet, devolver al parlamento la facultad constituyente o elegir una nueva convención), que no tan sólo implicaría una drástica alteración de las reglas del juego establecidas, sino que se constituiría en el camino más expedito para facilitar el rechazo del proceso constituyente.

Las presiones para que el gobierno intervenga en el proceso constituyente para rectificar su dirección se incrementan, pero es más que evidente que no lo puede hacer directamente, sin perjuicio de manifestar legítimamente sus opiniones esperando que aquellos convencionales identificados con el oficialismo, superen sus diferencias y ofrezcan fórmulas para construir una propuesta que pueda ser respaldada por una amplia mayoría nacional. Fórmulas que constituyan un todo armónico, que cumplan los estándares democráticos y que aseguren la gobernabilidad futura del país.

La opción de que el proceso fracase por falta de acuerdos de los convencionales, simplemente no es una opción. Y no tan solo el gobierno, sino que el país, requiere de un masivo respaldo a la propuesta de una nueva constitución, so pena de vivir un largo periodo de inestabilidad institucional.

Es necesario considerar que el plebiscito ratificatorio se convocará algunos meses después que la convención entregue su propuesta y todo apunta a que coincidirá con una merma del apoyo que el gobierno aún mantiene en las encuestas de acuerdo al comportamiento tradicional de la opinión pública y teniendo presente la compleja agenda que enfrenta el gobierno, los problemas de inflación, sequía, pandemia y otros que el gobierno deberá enfrentar. Y, por cierto, ello no contribuye a sumar fuerzas para la opción por el apruebo.

Sin embargo, aún queda un tiempo, no demasiado largo, para que la convención despache las propuestas de las diversas comisiones y entre en la etapa de armonización, así como la definición del proceso de implementación de una nueva constitución en caso de ser aprobada.

Los temas candentes de la agenda gubernamental

El indulto o amnistía para los presos de la revuelta

No hay una solución fácil o rápida para un problema que se arrastra desde el estallido social y probablemente se requiere enfrentarlo por partes y no englobarlo, como buscan sus familiares, ni menos sumarle nuevos casos (como los presos del WALMAPU), como proponen algunos sectores.

Desde luego, si existen personas detenidas sin formulación de cargos, como se afirma, el retiro de las querellas resuelto por el gobierno, debiera resolver buena parte de este problema. Si existen personas condenadas por delitos que no sean de sangre, existe la alternativa del indulto presidencial, que no requiere de nuevas leyes, liberaría a otros tantos detenidos. Una amnistía selectiva para delitos menores, como atentados en contra de la propiedad (con la debida indemnización para los afectados) contribuiría.

El problema se centra en los delitos mayores, hoy radicados en tribunales, en el marco de un debido proceso. Difícilmente. el parlamento aprobaría extender la amnistía para estos casos.

Es más que evidente que en Chile no existen presos de conciencia (encarcelados por sus ideas), Y existe todo un debate acerca de los delitos por motivaciones políticas que, por extensión, podrían incluir el asesinato del senador Jaime Guzmán u otros. Es evidente que muchos de los manifestantes que cometieron delitos en el marco del estallido lo hicieron por motivaciones políticas (otros por simple afán delictual). La duda es si ello es suficiente para justificarlos u otorgarles amnistía. Ejemplos históricos sobran, Está el caso de la ETA, la guerrilla en Colombia. El propio caso del régimen militar en Chile.

La solución no es simple, Por más que se busque la pacificación y reconciliación del país. Y todo indica que es necesario enfrentar el tema por separado.

El tema de la violencia

Es evidente que la violencia ha tendido a naturalizarse en nuestro país con el avance del crimen organizado y el narco tráfico. Cada vez es más frecuente enterarse de asesinatos, portonazos, secuestros, enfrentamientos armados. Crímenes violentos. Funerales de alto riesgo, Trata de personas, violencia intrafamiliar, femicidios, acosos, etc.

Las protestas, en sus inicios pacíficas, rápidamente devienen en desmanes, violencia y enfrentamientos entre los manifestantes y las policías, barricadas, destrozos y saqueos. La violencia en los colegios y universidades, es parte de este fenómeno de naturalización de la violencia.

Reformar, más que refundar, los servicios policiales, aparece como una prioridad del nuevo gobierno, pero ello no excluye la necesidad de reforzar la inteligencia policial, dotarla de mejores instrumentos para asegurar el orden público y mejorar sus procedimientos.

La demanda ciudadana por el orden incluye una demanda por mayor presencia policial. Sobre todo, en aquellas comunas y sectores más vulnerables.

Los estados de emergencia, como el de la Araucanía o la zona norte, son soluciones eminentemente transitorias y parciales, que no van al problema de fondo. Es indispensable diseñar una política integral de seguridad ciudadana controlada y dirigida por el poder civil, apoyada en servicios policiales que enmarquen su acción en los marcos democráticos y de pleno respeto a los derechos humanos, legítimas por el apoyo de la ciudadanía y con pleno respaldo del gobierno y el Estado.

Y esa es una asignatura pendiente en nuestro país.

La crisis migratoria

Es una crisis global, que golpea por igual a los países desarrollados como en desarrollo. Se origina no tan sólo por convulsiones o conflictos armados (guerras, golpes de estado o revoluciones) sino también por conflictos sociales, étnicos o políticos. Estados fallidos.

La crisis migratoria es relativamente reciente en nuestro país. En buena medida se explica por el convulsionado escenario político, económico y social que presenta nuestra región. No es indiferente con la imagen de éxito o de “milagro” que aún proyecta nuestro país en la región, Tampoco la extensión de nuestras fronteras y la evidente dificultad de protegerlas adecuadamente, O imprudentes señales entregadas por el gobierno anterior en materia de inmigración. O la falta de una moderna política migratoria, recién corregida por la nueva ley de migraciones.

Es más que evidente que la crisis subsistirá, pese a la nueva ley de migraciones y nuevos controles fronterizos Y requiere de una política integral no tan solo para controlar los ingresos, controlar la migración ilegal, sino también de acogida de los inmigrantes.

La inmigración ilegal y descontrolada representa un grave problema para el país. No tan sólo ingresan personas necesitadas de nuevas oportunidades que sus países de origen les han negado, Ingresan personas indeseables, que vienen a delinquir. Y no puede ser que algunas regiones del país se transformen en zonas de sacrificio, con la verdadera invasión de inmigrantes, ocupando espacios públicos y viviendo de la caridad de la comunidad.

El tema inflacionario

El mundo no acaba de salir de la pandemia, que no tan sólo ha generado una crisis sanitaria a nivel global, sino también una crisis económica y social de proporciones, cuando debe sufrir los efectos de una guerra en Ucrania, que ha impactado con fuerza a la economía mundial, con fuertes incrementos de los precios de los combustibles y alimentos, que golpean tanto a los países desarrollados como en desarrollo.

El economista Osvaldo Rosales ha analizado con detalle el impacto de la guerra en la economía mundial y en nuestra propia región. La inflación será un fenómeno que acompañará a nuestro país en los próximos años y obligará al gobierno a tomar medidas para atenuar sus efectos, especialmente para los sectores más vulnerables.

Una larga sequía que podría obligar a medidas de racionamiento

El país vive un largo período de sequía en los últimos quince años y todo apunta a que este año será nuevamente seco, afectando no tan sólo las áreas productivas, como la agricultura y la minería, sino también a las personas-

A estas alturas no bastan las campañas de cuidado de las aguas, o medidas paliativas, sino que se requiere definir una política de corto, mediano y largo plazo, para asegurar este vital elemento, en primer lugar, para el consumo humano, pero también para las actividades productivas.

Recurrir a las napas subterráneas, instalar nuevas plantas desalinizadoras, explorar la viabilidad de una carretera hídrica y otras, debieran ser parte de esa política integral, que requiere del concurso de la ciudadanía, el sector privado y el Estado. Y debiera ser una prioridad para el gobierno.

El gobierno no define aún sus prioridades políticas y legislativas de corto y mediano plazo, que se estarían afinando. Lo claro es que prepara una reforma tributaria, que se implementara en dos fases. Obviamente se cuenta entre sus prioridades enfrentar el tema de los pueblos originarios y la conflictiva situación que se vive en la Araucanía.

Y necesariamente deberá acompasar esta agenda con el proceso constituyente en curso.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA
PDTE. JUAN ANTONIO RÍOS N° 58 – PISO 3 (26 33 99 79)